

ECONOMÍA

El gasto en pensiones solo crece un 3,4% en marzo

MANUEL V. GÓMEZ, Madrid

El gasto en pensiones contributivas de marzo ha ascendido a 7.946 millones de euros, un 3,4% más que el mismo mes del año anterior. Este es el menor avance relativo, al menos, desde 1998, según los datos de la Seguridad Social. A pesar de que este mes de marzo el número de pensiones ha marcado un nuevo máximo histórico (9,1 millones, un 1,6% más) y de que la pensión media ha subido hasta los 867 euros mensuales (1,7% más), el gasto se ha frenado respecto a la evolución sostenida hasta diciembre. Este parón se viene dando desde enero.

La explicación llega, en gran medida, por la revalorización del 0,25% de todas las pensiones en 2014. La subida anual, que en el menor de los casos (como en 2013) se ha situado en el 1%, es uno de los principales componentes del incremento de gasto en las pensiones. Al reducirse esta parte, este año el aumento es mucho menor que en ejercicios anteriores. A mucha distancia hay otras causas, como el endurecimiento del acceso a la jubilación anticipada y parcial decretado justo hace un año.

Los afectados por los ERE caen un 61% en enero

M. V. G., Madrid

Más síntomas de que el mercado laboral está cambiando de signo. Las regulaciones de empleo cayeron el pasado enero un 52,2% y el número de afectados, un 60,7%, según el Ministerio de Empleo. En total, en el primer mes del año hubo 1.581 regulaciones de empleo, el dato más bajo desde 2011.

Todavía hay que remontarse más atrás para encontrar un dato más bajo de afectados por regulaciones de empleo. 19.285 que aparecen en la estadística oficial son la cifra más baja desde enero de 2006. La caída todavía se acentúa más, hasta el 69%, si se toma solo el número de afectados por despidos colectivos (2.430).

En plena recesión, los cambios en la tramitación de las regulaciones de empleo que trajo la reforma laboral disparó el número de expedientes y afectados durante los dos primeros años de vigencia. Ya en los últimos meses, de la mano del fin de la recesión y del desplome del mercado laboral, la estadística de regulaciones de empleo ha venido cambiando de tendencia.

El Bundesbank suaviza su rechazo a actuar contra el riesgo de deflación

Jens Weidmann no descarta que el BCE compre activos públicos o privados

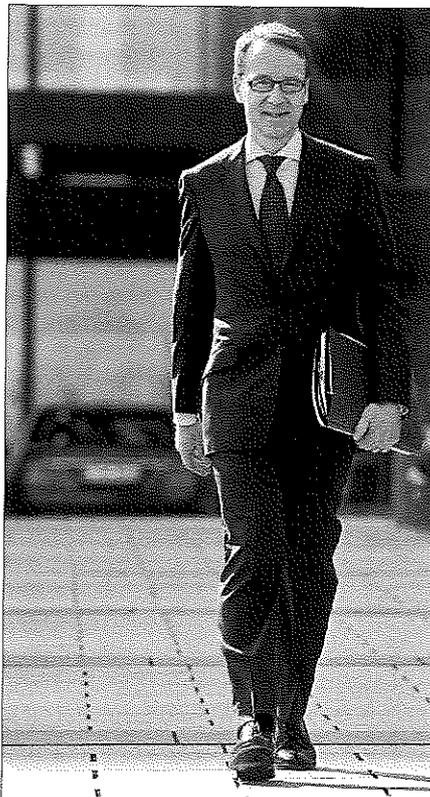
ENRIQUE MÜLLER
Berlín

Jens Weidmann, el joven y enérgico presidente del Bundesbank, el *halcón* que defiende a ultranza la ortodoxia de la política monetaria en el seno del Banco Central Europeo (BCE), graduó ayer su mensaje de rechazo a la más radical de las medidas extraordinarias, la compra de bonos gubernamentales o de títulos privados, que maneja el supervisor del euro ante el riesgo de deflación. El tiempo dirá —el Consejo de Gobierno del BCE en abril, la próxima semana, dará la primera pista—, si las palabras de Weidmann anticipan un histórico cambio de posición, o se limitan a un debate teórico.

Por lo pronto, el mercado tomó nota: tras la difusión de la entrevista que Weidmann concedió a la agencia Market News, y alguna intervención más en favor de nuevos estímulos, como la del gobernador del banco central eslovaco, Jozef Makuch, el euro se desinfló, hasta los 1,375 dólares, aunque al cierre de las Bolsas europeas (en positivo) había recuperado los 1,38 dólares.

“Las medidas no convencionales bajo consideración suponen en gran medida un terreno inexplorado y esto hace necesaria una discusión sobre su efectividad, así como sobre sus costes y efectos secundarios”, reiteró Weidmann en la entrevista. Pero, a continuación, incorporó un matiz nada habitual en los discursos de los gestores del banco central alemán. “Esto no implica que un programa de relajación cuantitativa [en inglés, *quantitative easing*] esté fuera de discusión... pero tenemos que asegurarnos de que se respete la prohibición de financiación monetaria a los Estados”.

El programa de relajación cuantitativa, aplicado por la Reserva Federal estadounidense o el Banco de Japón, es un mecanismo que permitiría al BCE comprar títulos públicos o privados,



Jens Weidmann, en Fráncfort, la semana pasada. / B. ROESSLER (EFE)

lo que rebajaría los costes de financiación y aseguraría la colocación de emisiones de deuda. A cambio de la medida, que persigue reactivar el crédito, la demanda y, en última instancia, los precios, el supervisor del euro ampliaría de forma notable su balance —en otras palabras, inyectaría más dinero—, y también, sus riesgos. “Desde luego, los activos públicos o privados que pudiésemos

comprar, deberían cumplir ciertos requisitos de calidad”, añadió Weidmann, entrando a discurrir una hipótesis que hace apenas un par de meses rechazaba de plano.

El presidente del Bundesbank también consideró que la mejor manera de contrarrestar la fortaleza del euro sería aplicar una tasa negativa a los depósitos que los bancos prefieren atesorar en la caja fuerte del BCE, una opción mucho menos radical que el *quantitative easing*. “Se trata de escenarios hipotéticos y no de decisiones inminentes”, añadió. Otras alternativas que se discuten serían condicionar inyecciones de liquidez a la banca a que garanticen determinados niveles de préstamo a familias y empresas. O, incluso, que las pymes titulicen deuda para ser vendida al BCE.

La tradicional oposición del Bundesbank a medidas extraordinarias ha ido más allá de las pala-

“Son hipótesis, no decisiones inminentes”, dice el gobernador alemán

bras. El predecesor de Weidmann, Axel Weber dimitió tras la primera compra, muy limitada, del BCE de bonos de países periféricos, en 2011. Y el propio Weidmann fue el único gobernador que votó en contra del programa lanzado en 2012 (y nunca puesto en práctica) para comprar bonos, a menor plazo, de países que pidan la ayuda de la UE.

La diferencia con otras etapas de la crisis es que lo que está en cuestión es la estabilidad de precios, el mandato esencial del BCE. Sus previsiones anticipan que la inflación enlazará cuatro años (de 2013 a 2016) por debajo del 2%, el objetivo del banco central. Y, también, un riesgo “limitado” de deflación.

Barclays cree que la deuda pública española no bajará del 100% del PIB hasta 2030

A. BOLAÑOS, Madrid

La deuda pública española rondará el 100% del PIB a finales de este año, tras haberse triplicado en el transcurso de la crisis. Y, según los analistas de Barclays, no dejará de crecer hasta 2017 (106%), aunque a un ritmo mucho menor. Pero lo más llamativo del informe del servicio de estudios del banco británico, difundido ayer, es que anticipa que la deuda pública no bajará del 100%, al menos, hasta 2030.

“En relación al PIB, la deuda se estabilizará a un nivel elevado”, subrayan los economistas de

la entidad. Eso, advierten, conlleva una mayor vulnerabilidad a “cambios bruscos en la percepción de los mercados”. En suma, cualquier susto financiero puede retrasar aún más el drenaje de la deuda pública, lo que implicaría que la economía española soporte, durante más tiempo, costes financieros mayores. Y también, un esfuerzo adicional en los ajustes fiscales para volver a poner bajo control el endeudamiento de las Administraciones.

El estancamiento de la deuda pública en un nivel tan elevado (y lleno de riesgos) sería, consecuencia de dos de las principales ca-

racterísticas que, en opinión de Barclays, imperarán en la zona euro en los próximos años, y singularmente, en los países periféricos: una tasa de crecimiento muy moderada, cercana al 1,5% anual, y una baja inflación, atenazada por la debilidad de la demanda interna y el desaplancamiento de las deudas privadas.

Ajuste fiscal más suave

Los analistas del banco británico dan por hecho que las Administraciones españolas podrán alcanzar el superávit público primario (excluido el gasto en intere-

ses) que necesitan, equivalente al 2% del PIB, para estabilizar el nivel de deuda a partir de 2017, una previsión en la que han tenido en cuenta el riesgo de que las citas electorales de 2015 (municipales, autonómicas y generales) lleven a suavizar el ajuste fiscal previsto para este año.

El servicio de estudios de Barclays cree también que es posible hacer bajar la deuda pública en la próxima década, pero lo vincula a que el Gobierno ponga en marcha ya nuevas reformas (fiscales, laborales y en mercados de bienes y servicios) que amplíen la capacidad de crecimiento.